

Se mantiene en vigor el resto de la Orden ministerial de 13 de diciembre de 1983 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de enero de 1984), que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de febrero de 1984.—P. D., el Director general de Exportación, Apolonio Ruiz Lígero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

10675

ORDEN de 28 de febrero de 1984 por la que se modifica a la firma «S. A. Taber» el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de hilados de fibras textiles sintéticas continuas y discontinuas y artificiales discontinuas y la exportación de tejidos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa «S. A. Taber» solicitando modificación del régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de hilados de fibras textiles sintéticas continuas y discontinuas y artificiales discontinuas y la exportación de tejidos, autorizado por Orden ministerial de 27 de septiembre de 1982 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de noviembre).

Este Ministerio, de acuerdo a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Modificar el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo a la firma «S. A. Taber», con domicilio en Barcelona-37, calle Lauria, 104, y N. I. F. A-08-073199, en el sentido de incluir en los productos de exportación los siguientes:

I. Terciopelos de fibras textiles sintéticas discontinuas, posición estadística 58.04.18.

II. Terciopelos de fibras artificiales discontinuas, posición estadística 58.04.78.2.

Segundo.—El interesado queda obligado a declarar en la documentación aduanera de exportación y en la correspondiente hoja de detalle, por cada producto exportado, las composiciones de las materias primas empleadas, determinantes del beneficio fiscal, así como calidades, tipos (acabados), colores, especificaciones particulares, formas de presentación, dimensiones y demás características que las identifiquen y distingan de otras similares y que en cualquier caso deberán coincidir, respectivamente, con las mercancías previamente importadas o que en su compensación se importen posteriormente, a fin de que la Aduana, habida cuenta de tal declaración y de las comprobaciones que estime conveniente realizar, entre ellas la extracción de muestras para su revisión o análisis por el Laboratorio Central de Aduanas, pueda autorizar la correspondiente hoja de detalle.

Tercero.—Las exportaciones que se hayan efectuado desde el 1 de enero de 1983 también podrán acogerse a los beneficios de los sistemas de reposición y de devolución de derechos derivados de la presente modificación siempre que se haya hecho constar en la licencia de exportación y en la restante documentación aduanera de despacho la referencia de estar solicitada y en trámite de resolución. Para estas exportaciones los plazos para solicitar la importación o devolución, respectivamente, comenzarán a contarse desde la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Se mantiene en vigor el resto de la Orden que ahora se modifica.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 28 de febrero de 1984.—P. D., el Director general de Exportación, Apolonio Ruiz Lígero.

Ilmo. Sr. Director general de Exportación.

10676

ORDEN de 1 de marzo de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 19 de abril de 1983, en el recurso contencioso-administrativo número 21.273/79, interpuesto contra sentencia de la Audiencia Nacional de fecha 28 de mayo de 1981, interpuesta por «Banco Meridional, S. A.».

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 21.273/79, ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como consecuencia de la apelación interpuesta por la Abogacía del Estado, contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 28 de mayo de 1981, interpuesta por el «Banco Meridional, S. A.», se ha dictado sentencia con fecha 19 de abril de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la apelación 38.885/81, interpuesta por la Entidad mercantil «Banco Meridional, S. A.» contra sentencia dictada en 28 de mayo de 1981 por la Sala jurisdiccional, Sección Segunda, de la Audiencia Nacional, sobre gestión de fondo de inversión mobiliaria, en que es parte apelada la Administración General, representada por el Abogado del Estado, debemos confirmar y confirmamos la sentencia

apelada por su conformidad al ordenamiento jurídico, sin pronunciamiento alguno sobre las costas de esta apelación.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fecha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 1 de marzo de 1984.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

10677

ORDEN de 1 de marzo de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 9 de diciembre de 1983, en el recurso contencioso-administrativo número 42.693 interpuesto contra resolución de este Departamento de fecha 28 de enero de 1982, por don Gabriel Bermúdez Castillo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 42.693 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Nacional, entre don Gabriel Bermúdez Castillo como demandante y la Administración General del Estado como demandada, contra resolución de este Departamento de fecha 28 de enero de 1982, referente a concurso para proveer plaza de Corredor de Comercio en Sevilla, se ha dictado con fecha 9 de diciembre de 1983 sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando así la inadmisibilidad alegada por la Abogacía del Estado, como el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel Bermúdez Castillo, contra las resoluciones:

Del Ministerio de Economía y Comercio de 23 de septiembre de 1981.

De la Dirección General de Política Financiera, de 2 de octubre de 1981; y

Del Ministerio de Economía y Comercio, de 28 de enero de 1982, esta última desestimatoria de los respectivos recursos ordinarios administrativos contra las primeras formulados, a que las presentes actuaciones se contraen debemos:

Confirmar y confirmamos tales resoluciones, por su conformidad a derecho, en cuanto a las motivaciones impugnatorias de las mismas ahora examinadas se refiere.

Sin expresa imposición de costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo previsto en el artículo 105 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de fecha 27 de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Madrid, 1 de marzo de 1984.—P. D., el Subsecretario de Economía y Hacienda, Miguel Martín Fernández.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

10678

ORDEN de 1 de marzo de 1984 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Las Palmas, con fecha 30 de enero de 1984, en el recurso contencioso-administrativo número 241/83, interpuesto contra resolución de fecha 18 de junio de 1982 por don Jesús Sancho Ortega.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 241/83 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, entre don Jesús Sancho Ortega como demandante y la Administración General del Estado como demandada, contra resolución de este Ministerio de fecha 18 de junio de 1982, sobre derecho a percibir indemnización por residencia, se ha dictado con fecha 30 de enero de 1984, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo, deducido a nombre de don Jesús Sancho Ortega, frente a resolución de 18 de junio de 1982, de la Subsecretaría de Economía del Ministerio de Economía y Comercio, por la que se deniega su solicitud de derecho a la indemnización por residencia al prestar sus servicios en la Jefatura Provincial de Comercio Interior de Las Palmas, como contratado administrativo, a cuya resolución se contrae la litis, y en consecuencia debemos anular y anulamos la misma por no estar ajustada a derecho, reconociendo el derecho del recurrente a la citada indemnización. Sin costas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi-